Constancia. El término de traslado dispuesto en favor de los ejecutados tras la resolución del recurso de reposición contra la orden de pago cursó entre el 15 y hasta el 28 de noviembre de 2023.

El 20 de noviembre se acercó escrito formulando excepciones previas.

El 22 de noviembre se allegó solicitud de llamamiento en garantía, formulación de tacha ideológica y se contestó la demanda proponiendo excepciones de fondo.

Armenia Quindío, diciembre 05 de 2023

No requiere firma Art. 2 Ley 2213/2022

Myriam Forero Jaramillo

Secretaria

**JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
ARMENIA QUINDIO**

Asunto: Rechaza Excepción Previa
Rechaza Llamamiento en Garantía
Rechaza Tacha Ideológica
Corre Traslado Excepciones de Mérito

Proceso: Ejecutivo Singular

Ejecutante: Condominio Pradera Boreal

Ejecutados: Beatriz Elena Ocampo Martínez
Luis Ernesto Osorio Henao

Radicado: 63001-31-03-003-2023-00207-00

Noviembre cinco (05) de dos mil veintitrés (2023)

Conforme advierte la constancia que acompaña esta decisión, la parte ejecutada arribó múltiples intervenciones una vez se reinició el cómputo del término de traslado a su favor, de modo que se impone resolverlas en esta oportunidad.

Excepción previa.

Bajo esa categoría los ejecutados formularon la excepción dilatoria reglada en el numeral 5 del artículo 100 del C.G.P, esto es la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, lo que apoyó en la carencia del certificado de existencia y representación legal, así como la certificación de intereses.

De la excepción anunciada se remitió copia a la parte actora, quien la replicó afirmando su improcedencia en tanto ello debía haberse formulado mediante recurso de reposición.

En orden a resolver, se aprecia que le asiste razón a la parte ejecutante al sostener que las excepciones previas en un asunto de este contorno deben ventilarse por la senda del recurso de reposición contra la orden de pago.

Lo anterior por mandato expreso del artículo 442.3 del C.G.P el cual pregona que *el beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago.* (enfatisa el despacho).

Así, en el proceso ejecutivo las excepciones de esta naturaleza no se interponen bajo el haz del artículo 101 procedimental, pues existe norma especial que se sobrepone a esta.

Ahora bien, como se trata de un recurso de reposición, aquel debe cursar dentro del término de ejecutoria respectivo, lapso excedido en esta oportunidad, pues la providencia que desató el anterior recurso de reposición fue resuelto en decisión notificada en el estado 3177 del 14-11-2023, de allí que el término hábil para formular el recurso de reposición contentivo de excepciones previas corrió el 15, 16 y 17 de noviembre último.

Sin embargo, la formulación sucedió el día 20 de noviembre del corriente año, es decir de forma extemporánea.

De lo expuesto, afloran dos circunstancias que conducen al rechazo de la defensa previa, esto es *i)* la elección incorrecta del instrumento por medio del cual se debía ventilar la cuestión, *ii)* la extemporaneidad en su presentación.

Vale destacar que, aunque el párrafo del artículo 318 del C.G.P habilita encauzar una censura por la vía procesal que resulte procedente, ello tiene lugar siempre que se hubiere interpuesto oportunamente, lo que no ocurrió en el asunto.

También es importante destacar que en el proceso ya había cursado recurso de reposición contra la orden de pago, pero en dicha oportunidad no se invocó expresamente la excepción previa que ahora se ha ventilado.

Llamamiento en garantía.

La parte ejecutada ha llamado en garantía a la Constructora Alzáte & Co S.A.S, ello en virtud a que mediante contrato de promesa de compraventa celebrado entre los ejecutados con tal organización en el que se prometió la enajenación de 72 predios situados en el Condominio Pradera Boreal, aquí ejecutante, habiéndose efectuado la entrega de estos.

Proclama en consecuencia que existe interés jurídico y responsabilidad solidaria de dicha entidad en el pago de las cuotas de administración, por lo que debía integrarse a la lid como llamado en garantía.

A ese respecto, se tiene que el artículo 64 del C.G.P establece que quien afirme tener derecho legal o contractual para exigir de otro una indemnización o perjuicio o su reembolso por la imposición de determinada condena puede llamar en garantía al pretense responsable para que en la sentencia se resuelva esa relación.

Para el caso del proceso ejecutivo, la decisión que pone fin a la instancia no gravita sobre la definición de relaciones sustanciales entre partes y terceros, amén de que la sentencia debe ocuparse en establecer si la defensa del ejecutado tiene o no la entidad suficiente para seguir con la ejecución propuesta, sin que tenga cabida auscultar sobre relaciones de tipo sustancial ajenas al juicio ejecutivo.

Así lo ha entendido de antaño la corporación de cierre de la especialidad¹, quien sobre el tópicó afirmó:

"... de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, la defensa de los ejecutados se circunscribe a la proposición de excepciones, lo que, de contera, descarta que ellos tengan facultad para vincular a un tercero en la condición de llamado en garantía. Ciertamente, el citado postulado precisa que "[d]entro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funden (...) Los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago"

En ese orden, no había lugar a acoger la solicitud que en ese sentido elevó Pablo Iragorri Jaramillo dentro del juicio ejecutivo hipotecario que se le adelanta, pues tal figura jurídica es, según se colige de la norma transcrita, palmariamente improcedente en asuntos de esa naturaleza.

¹ Sala de Casación Civil, providencia de 02 de septiembre de 2013, M.P.: Margarita Cabello Blanco, referencia: Exp. T. No. 76001 22 03 000 2013 00260 01

4.- Corrobora lo anterior, el mandato del inciso final del precepto 56 *ibidem*, aplicable al "llamamiento en garantía", por la expresa remisión que hace el canon 57 *ib.*, que dispone: "en la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado".

Ahora, tratándose de un proceso de ejecución es indiscutible que el juez encargado del mismo no puede en la sentencia resolver sobre el nexo sustancial entre el llamante y el llamado en garantía, toda vez que el fallo que la ley le faculta proferir está, indefectiblemente, regulado en los artículos 507 y 510 de la obra procedimental en cita, según la posición asumida por el demandado, es decir, si ha propuesto o no excepciones, preceptos que limitan tal pronunciamiento en líneas generales, a resolver esos medios de defensa ordenando seguir o no adelante la ejecución, no habiendo lugar, por ende, a desatar ninguna otra controversia"

No se discute que, respecto de las obligaciones derivadas del pago de las expensas comunes de la propiedad horizontal, por así dictarlo el artículo 29 de la Ley 675/2011, existe solidaridad entre el propietario y el tenedor de los bienes a cualquier título.

Sin embargo, el ejercicio de esa solidaridad es del resorte del ejecutante, quien establece contra quien o quienes enfila su acción ejecutiva, ello conforme a lo previsto en el artículo 1571 del C.C, el cual sostiene que "El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división."

De lo expuesto, refulge palmario que el llamamiento en garantía se torna improcedente en el proceso ejecutivo, lo que conduce a su rechazo.

Tacha ideológica de falsedad - Desconocimiento de documento.

El extremo pasivo ha propuesto la tacha ideológica de la resolución 070/2022 expedida por la Alcaldía Municipal de Circasia señalando que su contenido es apócrifo, ello en vista de que en la propiedad horizontal no se ha realizado asamblea extraordinaria en la que se hubiere nombrado al administrador que expidió las certificaciones de deuda o títulos ejecutivos allegados.

A la par, por la vía del desconocimiento de documentos, los ejecutados desconocieron la certificación que hace las veces de título ejecutivo, ello fundado en una discusión sobre quien fungía como administrador para la época de confección de aquellos instrumentos.

Indica además que en la copropiedad no se ha enajenado el 51% de las unidades privadas, por lo que es la ejecutada Beatriz Elena Ocampo quien es la administradora provisional.

De la tacha propuesta su impulsora remitió copia a la parte actora, quien se pronunció resaltando la improcedencia de la tacha en la medida de que los documentos no eran atribuidos a los ejecutados, pues sus firmantes eran otras personas.

Señaló además que la tacha procedía cuando se trataba de una falsedad material, no así ideológica o intelectual. Dijo además que la resolución controvertida gozaba de presunción de legalidad mientras no fuera anulada por la jurisdicción competente.

Sobre el desconocimiento insistió en que los documentos no se atribuyen a los demandantes, pues fueron suscritos por el administrador de la propiedad horizontal.

Finalmente, reclamó aplicar la sanción que implica la desestimación de la tacha.

Para resolver se considera,

El artículo 269 del C.G.P establece la procedencia de la tacha de falsedad, establecimiento como su presupuesto que a la parte que la promueva se le atribuya un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella.

Para el caso, esa condición no se verifica, pues la Resolución 070/2022 expedida por la Alcaldía Municipal de Circasia no está siendo atribuida a los ejecutados afirmando ser suscrita o manuscrita por aquellos, de modo que la tacha se torna improcedente y por ende conduce a su rechazo.

Nótese que la protesta que envuelve la tacha enarbolada apunta al fondo del acto administrativo mismo, controversia para la que el despacho no resulta competente, pues la anulación de los actos administrativos, por supuesto, escapa a la órbita del proceso ejecutivo y más allá, de la jurisdicción civil misma.

Ahora, sobre la sanción prevista en el artículo 274 procedimental, se tiene que ella tiene cabida cuando la tacha se decide en contra de quien la propuso; esa decisión implica por supuesto que la tacha se tramite y se resuelva de fondo, lo que no acontece en esta oportunidad, pues se está rechazando ante su improcedencia, lo que no habilita la imposición de la sanción en comento.

En lo que toca al desconocimiento de documento, el artículo 272 del compendio adjetivo permite a quien se le atribuye un documento no suscrito ni firmado por aquella desconocerlo.

Ahora, ese desconocimiento apunta únicamente a establecer la autenticidad del autor del mismo con la consecuencia de que al no establecerse el documento carecerá de eficacia probatoria.

Así, se deduce que el desconocimiento del documento no tiene cabida cuando lo que se discute es su contenido material o sustancial, pues, se itera, ese dispositivo procesal apunta a establecer la autoría del mismo, no así sus funciones o legitimación para suscribirlo.

Para el caso, la parte ejecutada apoya el desconocimiento en la discusión relativa a que si Alirio Castro Mina no era el administrador legalmente designado y por lo mismo no podía extender y suscribir las certificaciones de deuda que sirven de título ejecutivo, contienda que se aparta por completo del propósito del desconocimiento del documento.

A este punto, vale citar otro pronunciamiento de la CSJ en relación con la tacha de falsedad y el desconocimiento:

“La distinción es axial. Repercute en punto de las cargas probatorias. En la tacha de falsedad de los documentos públicos y privados, estos últimos de las partes y no de terceros, corresponde demostrar el supuesto de hecho a quien la formula. El desconocimiento del medio de convicción, por el contrario, tanto en el antiguo régimen como en el nuevo, debe ser propuesto por la parte contra la cual se opone el documento o por los sucesores del causante a quien se atribuye, y desde el punto de vista probatorio, traslada a la otra parte, a quien lo ha aportado al proceso, el deber de demostrar la autenticidad mediante el trámite indicado para tacha, porque si no se hace la manifestación del caso, en la forma prevista por ley, la consecuencia es, tenerlo por auténtico.”

De tal modo que, no pueden confundirse «tacha de falsedad» y «desconocimiento», como medios de impugnación de los documentos, por cuanto, no obstante sus semejanzas, presentan diferencias en la forma de proposición y en las cargas probatorias, según se expuso.

(...)

La tacha de falsedad, por tanto, supone una querrela que denuncia la falsedad en pos de destruir su existencia, que propone o impugna directamente la contraparte de quien presentó el documento, alegando y probando la falsedad material, para discutir su eficacia probatoria. Se surte en casos, como cuando el autor del documento, o la voz o la imagen grabadas no corresponden a la persona a la que se atribuye, o cuando el documento ha sido adulterado luego de elaborado, etc. Por supuesto, que dentro de la tacha, no caben la falsedad intelectual o ideológica, la mendacidad o simulación del contenido del documento, en cuanto declaraciones de voluntad o ideológicas.

El desconocimiento, no es tacha de su existencia legal, sino cuestionar y poner en entredicho; es desconfiar y censurar o rechazar la autoría que se imputa porque no le consta que a quien se atribuye sea el autor, expresándolo y explicándolo en la solicitud, con la particularidad de que invierte la carga de la prueba a quien lo presentó para que demuestre su veracidad, autenticidad o procedencia, so pena de que si no se «(...) establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria» (artículo 272 del Código General del Proceso), por cuanto su propósito es aniquilar la presunción de autenticidad para que no produzca efectos. El desconocimiento no es medio apto para alegar problemas de alteración o integralidad material del documento, porque estos motivos son materia propia de la querrela civil de falsedad.» (Resaltados del despacho).

De lo expuesto, es claro que la falsedad o desconocimiento de orden ideológico como el ofrecido en la defensa de los ejecutados no puede abrirse paso por la tramitación especial que el legislador diseñó para la tacha y desconocimiento del documento, todo lo cual conduce a su rechazo ante su improcedencia.

Finalmente, con la contestación de la demanda se interpusieron excepciones de mérito cuyo traslado ha de ordenarse mediante este auto, ello por así mandarlo el artículo 443.1 del C.G.P.

Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la excepción previa de ineptitud formal de la demanda, el llamamiento en garantía de la Constructora Alzáte & Co S.A.S y la tacha de falsedad ideológica de la resolución 070/2022 de la Alcaldía de Circasia Q.

SEGUNDO: CORRER traslado por el término de diez (10) días a la parte ejecutante de las excepciones de fondo propuestas por los ejecutados, para su pronunciamiento y fines probatorios.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

[Estado # 193 del 06-12-2023](#)

Firmado Por:
Ivan Dario Lopez Guzman
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 003
Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **683e382bd1d64c8053644a7f97766ec9b68f74843a9c39c111e554306123b4da**

Documento generado en 04/12/2023 08:58:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>